

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y EL CONFLICTO AGRARIO EN CHIAPAS: CRISIS Y DESAFÍOS

María del Carmen García Aguilar¹

Daniel Villafuerte Solís²

CESMECA-UNICACH

INTRODUCCIÓN

Para las autoridades agrarias, algunas organizaciones campesinas y estudiosos del problema agrario nacional, el reparto de tierras culminó en el momento mismo de la aprobación de la reforma al artículo 27 constitucional. En Chiapas, las políticas instituidas en el contexto del conflicto zapatista, que implicó la compra de 2 754 predios con una extensión de 245 mil hectáreas, fue la manifestación más clara de que el finiquito agrario era un hecho concluido. Sin embargo, una parte significativa de los conflictos en el campo chiapaneco sigue girando en torno a la tierra. En este artículo queremos reflexionar sobre la naturaleza estructural y coyuntural de estos conflictos, que nos permita no sólo identificar las dimensiones nuevas de éstos, sino también las mudanzas y las continuidades de sus actores tradicionales: las organizaciones campesinas y los gobiernos federal y estatal. Por el carácter estratégico que tiene para una porción significativa de la sociedad chiapaneca, enfatizamos la problemática agraria de la llamada “zona de conflicto” y reflexionamos sobre los proyectos en disputa, particularmente el proyecto de la territorialidad autonómica zapatista, que da un vuelco al tradicional manejo y resolución del conflicto agrario en localidades, municipalidades y regiones indígenas.

1. EL DIAGNÓSTICO. LA ESTRUCTURA AGRARIA DE CHIAPAS

En las tres últimas décadas, la tenencia de la tierra se modificó sustancialmente a favor de la propiedad social. Así, 58% de la tierra en Chiapas se encuentra en manos de ejidos y comunidades (4 419 310 hectáreas, según el Registro Agrario Nacional); esto sin contar con algunos terrenos nacionales no regularizados y tierras que todavía se encuentran en litigio. En términos reales, podemos afirmar que alrededor de 60% de la tierra está en manos del sector social. Sin embargo, las estadísticas registran que la minifundización es una característica de la propiedad social: 63.4% de los ejidatarios en la entidad, poseen menos de 10 hectáreas y, de éstos, 38.1% poseen menos de cinco hectáreas. También es un hecho el fraccionamiento de la tierra: del universo de sujetos con derecho a tierra parcelada, 45% tiene una parcela, 20.2% posee dos, 11.3% cuenta con tres y 25% con más de tres. El promedio de este último estrato es de 6.3 parcelas por ejidatario (véase Procuraduría Agraria, marzo de 2000), parcelas que en regiones como en Los Altos, suman, cuando mucho, una o dos hectáreas.

El proceso de minifundización también está presente en el sector privado. Por ejemplo, en 1970, cuando todavía podíamos ver en el V Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal, propiedades de más de 5 mil hectáreas, se reportaba la existencia de 6 765 predios de hasta 5 hectáreas, 25.9% de éstos eran

¹ Cuerpo académico Política, Diferencia y Fronteras.

² Cuerpo académico Política, Diferencia y Fronteras.

de hasta 1 hectárea. Veinte años después, en 1991, el VII Censo Agropecuario reportó la existencia de 153 739 predios (unidades de producción rural según la denominación del censo), con una superficie de 369 511 hectáreas y para 1998, el número total de propiedades menores de 5 hectáreas se calculaba en 200 258, con una superficie total de 545 451 hectáreas, esto por la adición de 175 939 hectáreas compradas a particulares y transferidas a grupos campesinos³ (véase Villafuerte, *et al.* 2002).

Parte del problema del fraccionamiento de la tierra radica en el crecimiento de la población. En las últimas tres décadas ésta pasó de aproximadamente un millón 570 mil a casi cuatro millones (3 millones 920 mil 515 habitantes según el Censo del año 2000). Más de 60% de la población sigue viviendo en el medio rural, sin que las condiciones de la producción hayan variado significativamente. El escaso desarrollo del sector agropecuario puede observarse en la proporción de mano de obra no remunerada: en el año de 1990, 79.2% de la fuerza laboral empleada en las unidades de producción individual no tenía remuneración; y de la mano de obra remunerada, 83.3% era de carácter eventual, lo cual evidencia un problema estructural de subempleo. Al comenzar el siglo XXI, 47.2% de la población ocupada se encontraba en el sector primario, lo que se traduce en una enorme presión que genera fuertes tensiones entre la población rural por la disputa de tierras. En el año 2000, de poco más de 570 mil personas ocupadas en las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras, 40.6% no recibieron ingresos, y 43.2% obtuvieron menos de un salario mínimo, lo que indica que 83.8% de la población ocupada se encontraba en condiciones de extrema pobreza. A esto, hay que agregar 54 850 personas que ingresaron entre uno y dos salarios mínimos, que representan 9.6% de la población ocupada, lo que revela una situación dramática, pues resulta que 93.5% de la población ocupada en el campo se encuentra en condiciones de pobreza.

2. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE EL EZLN Y EL MOVIMIENTO CAMPESINO

Como se recordará, en el marco del “Plan del pueblo mexicano” el EZLN hizo suya la demanda legítima de los mexicanos por “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (Primera Declaración de la Selva Lacandona, 1993). En su comunicado del 1° de marzo de 1994, define entre otras demandas, la anulación de la reforma salinista al artículo 27 constitucional exigiendo la recuperación del respeto de su espíritu original: la tierra es para los indígenas y campesinos que la trabajan. Como demanda articulada al reparto agrario establecida en la ley agraria revolucionaria estaba el acceso garantizado de los factores de la producción, amén de la dotación a la población rural de los servicios sociales básicos e infraestructura económica (*Perfil de la Jornada*, 3 de marzo, 1994).

Estas demandas fueron ampliamente compartidas por la mayoría de las organizaciones campesinas, tanto independientes como oficiales. Para las dirigencias, el problema de Chiapas es un asunto eminentemente rural, y la crisis que vive el sector tiene que ver con la distribución inequitativa de los factores de la producción, entre los que destaca la tierra. A pesar de los esfuerzos por encarar las exigencias del mercado con estrategias inéditas en el campo de la producción y la comercialización, como fue el caso de organizaciones de pequeños cafecultores, reconocen que la crisis se ha hecho cotidiana; no se trata —se dijo en su momento—, sólo de una disminución en los rendimientos y de una baja de precios, que amenazan con un mayor deterioro de sus ingresos o la quiebra misma de las pequeñas empresas, sino de cómo encarar una estrategia —la neoliberal— de la que desconocen sus bondades, no así sus efectos

³ Parte del conflicto que ha tenido que enfrentar el gobierno de Pablo Salazar es la regularización de esta superficie entregada a grupos campesinos afiliados a distintas organizaciones, quienes reclaman que la tierra adquirida cambie de estatus, de copropiedad a ejidal. A este respecto, el gobernador Pablo Salazar señala: “Con el Programa para la Regularización de la Propiedad Fideicomitida (PRPF), se han logrado en esta administración regularizar 184 mil 496 hectáreas escrituradas a favor de 47 mil 528 familias, constituyendo 880 nuevos núcleos agrarios...” (Cuarto Informe de Gobierno, 2004)

negativos. En este marco, ninguna sorpresa causó que la mayoría de las organizaciones campesinas abrazara la causa zapatista reconociendo el liderazgo moral del EZLN, pues en una postura autocrítica reconocieron las insuficiencias y los quiebres internos por los que atravesaban. En el mismo año de 1994, se creó el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) con 280 organizaciones, considerándosele una fuerza política que potenciaría al movimiento zapatista (Moguel, 1994).

Al calor de estos planteamientos y a la luz de una convergencia informal entre el EZLN y la mayoría de las organizaciones campesinas independientes, incluso las no independientes, muchos estudiosos del campo mexicano, proyectaron un diagnóstico y una alternativa, que puede sintetizarse en la propuesta que Armando Bartra hizo en septiembre de 1994. El diagnóstico de este autor registra a Chiapas como una entidad eminentemente rural, sustentada en una clase dominante finquera y ganadera, gestora de las abismales injusticias económicas y sociales. En este contexto, una salida tiene que recuperar antes que nada estas dimensiones internas de la sociedad chiapaneca. En palabras de Bartra: “la reparación de las abismales injusticias económicas y sociales pasa por la reasignación de la tierra” (Bartra, 1994: 1). La propuesta va más allá, se requiere de un: “programa general de desarrollo comprometido con las necesidades de la población y con la preservación de la naturaleza. Un programa que asuma las indudables ventajas comparativas de la región de cara al mercado mundial, pero cuyo punto de partida sean los chiapanecos y su hábitat. Un programa que encauce la economía regional por una vía ajena al saqueo de los indios y de la naturaleza. Y un programa así sería una auténtica revolución, pues en Chiapas, como en todo el sureste, crecimiento económico ha sido hasta ahora sinónimo de etnocidio y ecocidio”. Concluye que “lo que está fuera de discusión es que en Chiapas no pueden seguir gobernando los que han mandado durante los últimos 500”. Ello supone, ante todo y sobre todo, “retirarle el mando a la oligarquía y el cacicazgo chiapaneco, quitarles el poder que hasta ahora han ejercido de manera excluyente y absoluta” (Bartra, 1994: 1-2).

El consenso entre los actores sobre la naturaleza estructural del problema de Chiapas y la coyuntura abierta por el EZLN no podían ser más favorables para neutralizar el sentido liberal de las políticas rural y agrícola y emprender el cambio en la dirección apuntada por Armando Bartra. ¿Qué ocurrió? En otros trabajos nos hemos referido al comportamiento seguido por los distintos actores directamente involucrados —EZLN, organizaciones campesinas y gobierno federal— en la etapa que va de enero de 1994 a 2000, por lo que sólo haremos una breve síntesis de dicho periodo (García, 1998; Villafuerte, *et al.* 2002). A lo largo de los primeros tres años, particularmente los dos primeros, la entidad vivió una amplia movilización campesina que se manifestó en la toma directa y masiva de predios.

El protagonismo de las organizaciones campesinas, independientemente de sus idearios político-ideológicos, se hizo visible, sin embargo, recordemos que la fractura del CEOIC en vísperas del proceso electoral en la que se elegiría al gobernador del estado, hizo inevitable la toma de posición de cada uno de los bloques. Más tarde, uno de los bloques del CEOIC, la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), que había manifestado su adhesión al EZLN y su movimiento, sufrirá su primera ruptura cuando un grupo de organizaciones decide negociar sus demandas agrarias directamente con el gobierno federal, no obstante, más tarde lo hará el resto de organizaciones.

Recordemos que el secretario de la Reforma Agraria, desde el inicio del conflicto, fue categórico al afirmar que la negociación de todo conflicto agrario se daría en el espacio de la entidad y dentro de los márgenes de las instituciones definidas para ello, lo que significaba que el conflicto se resolvería en el marco del nuevo artículo 27 constitucional. Después de algunas experiencias fallidas, se instrumentó con éxito la estrategia de los *fideicomisos agrarios*, que en palabras del titular de la Reforma Agraria, posibilitó que los campesinos adquirieran la tierra a nombre propio y la pagaran con un respaldo financiero del gobierno federal, sin que ello implicara romper con la nueva legalidad (*La Jornada*, 16 de septiembre, 1995).

Si queremos pensar en un saldo positivo, registremos, de acuerdo con la Secretaría de la Reforma Agraria, que hasta agosto de 2000, las negociaciones habían derivado en la compra, por parte del gobierno federal, de 2 754 predios que en conjunto ascendió a 245 mil hectáreas, beneficiando a 60 mil campesinos, de 61 organizaciones y 120 grupos independientes. Sin embargo, los impactos se miden mejor si consideramos que la estrategia gubernamental logró no sólo la erosión y fragmentación de las organizaciones, sino al regionalizar el problema de la demanda agraria, canceló, en el plano nacional, la posibilidad de revertir el artículo 27 constitucional y las leyes reglamentarias de la misma, como era la propuesta del movimiento campesino nacional. Paralelo a la negociación de la compra de tierras, el gobierno federal asumió una estrategia similar para negociar las demandas de impulso y apoyo al sector agropecuario. La negociación la hizo con cada una de las organizaciones o en pequeños bloques, y no con un frente común, propiciando poca claridad en los compromisos gubernamentales para revertir la crisis productiva y de comercialización que caracterizaba al sector.

Por su parte, el EZLN terminó, no sin tensiones, desarticulándose de las acciones seguidas por las organizaciones campesinas. Aunque su alejamiento de la problemática sectorial se hizo visible después de junio del mismo 1994, cuando sus demandas asumieron un perfil estrictamente político (véase, por ejemplo, la Segunda Declaración de la Selva), la fractura se hizo visible en el segundo semestre de 1995, culminando en 1997, con una crítica abierta al comportamiento político de las organizaciones campesinas por parte del Subcomandante Marcos (*Tiempo*, noviembre, 1997).⁴

3. LAS NUEVAS EXPRESIONES DEL CONFLICTO AGRARIO

Para la SRA, en las estrategias de solución de los conflictos agrarios de Chiapas se excluye el mecanismo del reparto en cualesquiera de sus modalidades. En el reporte de agosto de 2000 la SRA refiere la firma y la ejecución de los acuerdos agrarios, que implicó la compra de 2 754 predios, localizados mayormente en las regiones: Centro (24.97%); Selva (21.40%); Fronteriza (14.65%), y Frailesca (12.94) (véase SDA, Avance de los Acuerdos Agrarios, agosto de 2000) (véase cuadro 2). Sin embargo, los acontecimientos de 2001 revelan la persistencia de los problemas agrarios, algunos de dimensiones mayores como las invasiones en la zona de influencia del EZLN, la desocupación de los núcleos de población asentados en la reserva de la biosfera Montes Azules y la disputa por los Chimalapas; y otros, producto de la nueva correlación de fuerzas propiciada por la llegada a la gubernatura de Chiapas de Pablo Salazar Mendiguchía, un gobierno aliancista que había establecido fuertes compromisos con las organizaciones campesinas más importantes de la entidad.

El gobierno de Salazar Mendiguchía heredó tres conflictos: la invasión de alrededor de 80 mil hectáreas pertenecientes a unos 700 propietarios de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, por bases de apoyo del EZLN durante 1994 y 1995; el problema de la existencia de 17 asentamientos irregulares en la reserva ecológica de Montes Azules, algunos de ellos ya reubicados; y una vieja disputa entre comuneros de Oaxaca y ejidatarios de Chiapas, por más de 120 mil hectáreas ubicadas en la zona de los Chimalapas, donde se mantiene una fuerte tensión.⁵ Veamos los dos primeros.

⁴ “No sólo las oficiales, sino que también las organizaciones sociales independientes se reagrupan en un nuevo bloque [...]. Con la bandera del “tercerismo” (ni gubernamentales ni zapatistas), los “líderes” de siempre se mezclan con los honestos y se preparan para darle a los gobiernos federal y estatal el interlocutor que necesitan para simular soluciones y vender mentiras en el extranjero” (*Tiempo*, noviembre, 1997). La respuesta de uno de dirigentes históricos de la CIOAC, no se hizo esperar: “No se puede decir a la gente, luego de 20, 30 años de lucha por la tierra, que ahora no la agarre porque es ¡contrainsurgente! Lo mismo sería para los sindicatos: no se le puede decir a los trabajadores que no reciban aumentos salariales porque es contrainsurgente. ¡Por favor!” (*Este Sur*, noviembre, 1997).

⁵ Para profundizar en el tema, véase Lisboa, Miguel “Génesis de un conflicto agrario y límites en el noroeste de Chiapas: La Selva Chimalapa”.

Respecto al primero, en febrero de 2000, la Unión de Propietarios Rurales Doctor Belisario Domínguez exigía que dentro de las negociaciones con el EZLN fueran tomados en cuenta como un actor del conflicto. Su dirigente, Jorge Constantino Kanter, hoy presidente municipal del municipio de Comitán, señaló que los ranchos y tierras ejidales invadidas en la zona de conflicto no habían sido devueltas, reconociendo que se trata de más de 80 mil hectáreas de propiedad y un buen número de tierras ejidales de campesinos que no han podido retornar a sus comunidades.

Respecto al segundo problema, a un lado de Las Cañadas, en los alrededores de la reserva de la biosfera Montes Azules, se agudiza el conflicto entre la comunidad lacandona y las comunidades indígenas tseltales, tsotsiles y tojolabales asentadas en la citada reserva. Se trata de viejas y nuevas invasiones de tierras, estas últimas a raíz del surgimiento del conflicto neozapatista, en la zona de la reserva considerada área de la comunidad lacandona. El nivel de confrontación fue tal que el día 12 de septiembre de 2001, se realizó una reunión de alto nivel, encabezada por el gobernador, en la cual participaron funcionarios federales y estatales, así como autoridades de las comunidades, donde se acordó la instalación de la mesa agrario-ambiental para la atención de la Selva Lacandona (*Vanguardia del Sureste*, 13 de septiembre de 2001). Horas antes de realizarse esta reunión en el Palacio de Gobierno, las declaraciones de la comunidad lacandona habían subido de tono. Margarito Chan Kayun, uno de los dirigentes lacandones, declaró que se encuentran invadidas 100 mil hectáreas, por lo que emplazaría al gobierno del estado para que ordene un desalojo, de lo contrario, tomarían justicia por sus propias manos (*Cuarto Poder*, 13 de septiembre de 2001).

En la citada reunión, el gobernador del estado manifestó que se haría un diagnóstico amplio que permitiera conocer caso por caso los problemas de invasiones, a fin de actuar apegado a derecho en cada situación. También señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado, recibirá las denuncias en casos de invasiones para dar paso a la acción de la justicia (*Vanguardia del Sureste*, 13 de septiembre de 2001). No obstante, las comunidades asentadas en la reserva de la biosfera advirtieron que no aceptarán ningún desalojo o acción que los prive de sus derechos agrarios y manifestaron su preocupación por el compromiso del gobernador Pablo Salazar con la comunidad lacandona, para reactivar las denuncias penales en contra de los habitantes de las 21 poblaciones localizadas en la zona natural protegida (*La Jornada*, 1 de octubre de 2001).

Los líderes de las poblaciones asentadas en la reserva manifiestan la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra o su reubicación, junto con un programa de manejo y aprovechamiento sustentable de la selva. Señalan que, “quienes piden el desalojo violento y la reactivación de las órdenes de aprehensión son grandes corporaciones multinacionales interesadas en saquear los secretos de la Selva Lacandona para patentarlos; empresas interesadas en construir gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos ríos de la selva y empresas de ecoturismo” (*La Jornada*, 1 de octubre de 2001).

Además de estos problemas mayúsculos, los conflictos en torno a tierra en el año de 2001 registraron cierta intensidad a lo largo del territorio chiapaneco, y una idea de su magnitud es proporcionada por la Procuraduría Agraria al reconocer que, hasta marzo de 2000, había 14 047 conflictos agrarios. Ciertamente se trata de conflictos latentes que forman parte de una herencia de varios sexenios atrás, tales como las irregularidades por posesión de tierras comunales en Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza, San Juan Chamula y en las reservas de La Sepultura y La Encrucijada. Sin embargo, emergen nuevas tensiones, éstas se dan entre el nuevo gobierno y las organizaciones campesinas que le apoyaron durante su campaña, mismas que exigirán el cumplimiento de las promesas hechas en campaña, y entre el nuevo gobierno y las organizaciones que no apoyaron la campaña del ahora gobernador, declarándose víctimas de éste. No dejan de ser relevantes, por sus implicaciones en el movimiento campesino, dos fenómenos relativamente nuevos en la conflictiva agraria de Chiapas. El primero se refiere a que los conflictos ocurren con una intensidad mayor entre las mismas agrupaciones campesinas y sus bases; el segundo, es la pérdida de centralidad de la demanda agraria y el peso que cobran otras dimensiones de la problemática social chiapaneca.

De manera sintética registremos los conflictos que se presentaron en el primer año de la administración de Salazar Mendiguchía. El 10 de abril de 2001, en el marco de la celebración del 82 aniversario luctuoso de Zapata, las organizaciones campesinas insistieron que el problema agrario no estaba resuelto en Chiapas. En particular, el Congreso Permanente de Organizaciones Sociales y Económicas de Chiapas (CPOSECH), que apoyó la campaña del nuevo gobierno, conminó a que éste cumpla su palabra de solución a los problemas agrarios, que entregue la tierra a quien la trabaja y que reoriente la política de atención con los que menos tienen. Esta organización tiene en posesión 60 predios irregulares, los cuales no están dentro de los acuerdos agrarios, pero exigieron que éstos sean entregados a los campesinos solicitantes de tierras. Además, plantearon que existen 250 campesinos presos de diversas organizaciones por motivos agrarios y existe la amenaza, por parte del procurador estatal de justicia, Mariano Herrán Salvati, de liberar más de 800 órdenes de aprehensión.

Por su parte, la OCEZ-CNPA una de las organizaciones de tradición agrarista, se manifestó bloqueando carreteras, mas no pedían tierras:

hoy luchamos ante la nueva adversidad en que nos encontramos miles de familias que emigran hacia los Estados Unidos en busca de una oportunidad que se nos niega en nuestro propio país; la cerrazón política, la persecución y represión por motivos políticos vuelven a caracterizarnos, aún cuando se jactan de cambios políticos obligados por esta vieja situación política, representada por demagogia, salimos nuevamente a manifestarnos para exigir créditos, servicios sociales, vivienda, justicia, planes reales de desarrollo, no al desmantelamiento y la quiebra generalizada del campo (*Cuarto Poder*, 11 de abril, 2001: 12).

La Central Campesina Unitaria de Trabajadores (CUT), el Movimiento de Organizaciones Campesinas y Regionales (MOCRI-CNPA) y la Alianza de Liberación Campesina de Ixtapa (ALCI), también se manifestaron en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, para exigir la liberación de los presos políticos de esta última organización.⁶ No hubo, sin embargo, claras alusiones a las reivindicaciones agrarias. Otras organizaciones se manifestaron en distintos puntos de la entidad chiapaneca con demandas en varios sentidos: unas exigiendo la libertad de presos políticos, y otras pidiendo la legalización de predios invadidos. Algunas, que en su momento reivindicaron la tierra, pusieron el acento en créditos, servicios sociales, vivienda, justicia, planes de desarrollo y educación. La principal demanda de la marcha convocada por la CNC fue que el congreso local quitara las manos de las decisiones en el interior de la organización.⁷

Al calor de las contradicciones entre el gobierno y las organizaciones, se reactivaron viejos problemas. El caso de Venustiano Carranza es uno de ellos, al convertirse en uno de los focos de mayor tensión. Hay que recordar que esto ocurre después de un largo ciclo, que se inicia el 28 de agosto de 1965 con la publicación en el *Diario Oficial de la Federación* del reconocimiento de bienes comunales por 52 152 hectáreas, y se cierra al término de la administración del gobernador Absalón Castellanos Domínguez, a finales de 1988.⁸ A partir del conflicto neozapatista, el problema ha tomado otras dimensiones. Ahora la lucha no está centrada entre caciques y campesinos, sino entre campesinos; la vieja disputa entre los

⁶ El portavoz de la CUT, Andrés Mijangos Pérez, pidió la liberación de Mario Álvarez Rodríguez, acusado de despojo de tierras; y denunció que existen órdenes de aprehensión en contra de Elicerio Pinto y Eduardo Álvaro, miembros de esta organización.

⁷ Esto en clara alusión al conflicto que se suscitó por la disputa en torno a la dirigencia de esta organización, donde, por un lado, el congreso del estado apoyó al diputado Ramiro Micelli Maza, de filiación priista y crítico de Pablo Salazar, y por otro lado, Julián Nazar Morales, dirigente de la organización Sociedad Campesino-Magisterial (SOCAMA), quien el 2 de abril tomó por asalto las oficinas de la CNC proclamándose nuevo secretario general de este organismo. Micelli Maza, junto con sus seguidores interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de Nazar Morales por el delito de allanamiento de la CNC. Finalmente, Nazar Morales ganó la batalla y se convirtió en diputado local plurinominal y líder de la bancada priista en el congreso local.

⁸ Una explicación detallada y sustentada en datos históricos del viejo y complejo problema de Carranza, se encuentra en la obra *Los llanos en llamas: San Bartolomé de los Llanos*, Chiapas de Renard, Cristina, 1998, Universidad Autónoma Chapingo-Claves Latinoamericanas, México.

comuneros de la Casa del Pueblo, formada en 1974, para defender las tierras comunales, y los de la Alianza San Bartolomé, integrada por diversos grupos que reclamaban la división de las tierras comunales, comienza a reactivarse en un contexto de polarización de fuerzas sociales en Chiapas. El 19 de abril de 2001, ocho campesinos afiliados a la organización Alianza San Bartolomé, de la comunidad de Canalucun, perteneciente al poblado Paraíso del Grijalva, en el municipio de Venustiano Carranza, fueron asesinados en una emboscada. Aunque el nuevo gobierno restó importancia al hecho, el problema no deja de tener tintes políticos.

Los sucesos de Carranza, tornándose más graves desde que Pablo Salazar tomó posesión como gobernador, reactivaron una serie de conflictos que comenzaron esporádicamente en el mes de enero. Así, en distintos puntos de la geografía chiapaneca, se fueron registrando las invasiones de tierra que, de alguna manera, indican que el problema agrario se mantiene como una realidad que se niega a desaparecer, y que más temprano que tarde, de no implementarse medidas que propicien el desarrollo económico dentro y fuera del ámbito agropecuario, tenderá a crearse una situación de fuerte inestabilidad en el campo. Veamos algunos ejemplos de lo ocurrido durante el primer año del nuevo gobierno.

Una de las primeras invasiones ocurrió en la región Frailesca, donde el 26 de enero se registró una invasión a la finca cafetalera Monte Bonito propiedad de José González, ubicado en el municipio de Villa Corzo. El 16 de abril, en la región centro 400 campesinos pertenecientes a la OCEZ invaden los predios El Desengaño, San José, El Cascajal y El Relleno, ubicados en el municipio de Venustiano Carranza. Los cuatro predios suman 2 mil hectáreas y forman parte de las tierras que reclaman los campesinos de esa organización. En la región Costa, el 25 de mayo, en el municipio de Huehuetán, un grupo de 40 campesinos invade la finca Las Chispas, propiedad de Pablo Hoffman. Asimismo, se registran tensiones por la disputa de 205 hectáreas entre miembros de la Organización Proletaria Emiliano Zapata-Bloque del Poder Popular (OPEZ-BPP) y la OPEZ estatal. El predio se ubica en el Poblado Ricardo Flores Magón, en el municipio de Acapetahua, y ambos grupos se dicen legítimos propietarios. En los primeros días de junio, la Procuraduría General de Justicia del estado desalojó a campesinos y detuvo a 69 personas, incluyendo a líderes que invadieron los predios Las Chispas, en el municipio de Huehuetán; Flor de Azalea, en el municipio de Tapachula y Cozalapa, en el municipio de Suchiate. El 24 de octubre, en comunicado de prensa número 2217, el gobierno del estado informa del desalojo del predio La Gloria, en el municipio de Tonalá; el saldo fue la detención de 40 personas por elementos de la policía judicial.

En la región Norte, el 15 de febrero, 60 campesinos invaden la finca Banana-plus, ubicada en el municipio de Pichucalco, que cuenta con 548 hectáreas. El 17 de abril, 138 familias, declaradas bases de apoyo para el EZLN, retornaron a la localidad de Guaquitepec y recuperaron 341 hectáreas de las fracciones Pamalá y La Capilla, municipio de Chilón. A principios del mes de junio, campesinos de Huitiupán ocupan cinco mil hectáreas y reclaman apoyo del gobierno del estado para recuperarlas. Estas tierras fueron adquiridas por la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de la presa hidroeléctrica Itzantún, pero la suspensión de la obra dio lugar a que los campesinos ocuparan las tierras y ahora reclaman sean legalizadas en su beneficio, ya que, de acuerdo con Beltrán García Méndez, coordinador de la organización Lumantik, no permitirán que el gobierno federal reactive el proyecto, pues implicaría el desalojo de los campesinos que ya ocupan esas tierras.

En la Sierra de Chiapas, a finales de mayo de 2001, un grupo de pobladores del municipio serrano de Bejucal de Ocampo invadió 285 hectáreas de la comunidad El Cercadillo, ejido que pertenece al municipio de Amatenango de la Frontera. Se trata de un viejo problema no resuelto en donde se juxtaponen dos resoluciones presidenciales sobre el mismo predio, uno de 1928 y otro de 1930. Este incidente amenaza con generar enfrentamientos, ya que el municipio de Amatenango de la Frontera, además de este conflicto, tiene problemas limítrofes con otros dos municipios en las comunidades de La Pureza y Nueva Jerusalén.

En la Selva, el 7 de marzo, indígenas tseltales del ejido El Jardín, invaden una superficie de aproximadamente 70 hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna de Nahá, perteneciente a la comunidad lacandona. El 4 de mayo, campesinos tseltales de las comunidades de Cuauhtémoc y Peña Limonar, municipio de Ocosingo, se enfrentaron a machetazos, con un saldo de tres heridos.⁹ El día 2 de junio, en el municipio de Palenque, se realizó un desalojo en los predios ganaderos El Mango, Santa Ana, San José Tepehuaje, La Rivera, Serengueti, Santa Rosa y El Pentágono. El 31 de agosto, un grupo de 260 hombres de filiación zapatista desalojó a 33 campesinos de la ARIC Independiente y Democrática del predio denominado San Juan, ubicado en el municipio de Ocosingo; el saldo fue de tres personas heridas. Las 48 hectáreas en disputa fueron, vía fideicomiso, adjudicadas a miembros de la ARIC en 1997.

En la región Fronteriza, limítrofe a la zona de la Selva, las tensiones entre organizaciones han subido de tono. Como se sabe, la CIOAC, previo a 2001, se había dividido en dos fracciones: una que se reivindica como democrática y otra llamada oficial. Ésta última ha sido acusada de propiciar expulsiones de campesinos de la zona Las Margaritas. Así, por ejemplo, el 21 de marzo de 2001, indígenas pertenecientes a la Unión de Pueblos Mayas Tojolabales solicitaron al gobierno municipal la presencia de policías y Seguridad Pública en virtud de que habitantes de la comunidad de Zaragoza, del ejido Nuevo México, están amenazados de expulsión por parte de la CIOAC-oficial.

Muy cerca de Las Margaritas, en el municipio de La Trinitaria, también se han registrado tensiones entre miembros de distintas organizaciones. A mediados de septiembre de 2001, 14 familias indígenas afiliadas a la CIOAC-Independiente, fueron expulsados del poblado Nuevo Chapultepec por miembros de la OPEZ, debido a que se negaron a formar parte de esta última agrupación. Según versión de Reynol Hernández Pérez, representante de los afectados, “los caciques de la OPEZ, armados con palos y machetes, llegaron a las viviendas de 10 familias, luego destruyeron sus casas” (*Cuarto Poder*, 18 de septiembre de 2001). Esta es la segunda expulsión que realizan los miembros de la OPEZ, la primera se llevó a cabo el 15 de julio, cuando cuatro familias de la comunidad Nueva Libertad, del mismo municipio, fueron echados por hombres armados.

En la región Los Altos, renacen los conflictos por límites de tierras. El 6 de septiembre se reactiva este tipo de conflicto entre comuneros de Chenalhó y Chalchihuitán. El ayuntamiento de Chenalhó inició acta administrativa por la posible comisión de delitos de las autoridades comunitarias de Chalchihuitán.

Sin lugar a dudas, el mayor enfrentamiento que se ha dado entre el gobierno y las organizaciones campesinas, ha sido el protagonizado por las bases y la dirigencia de una fracción del MOCRI, a la que se le unieron otras organizaciones como la OCEZ-Carranza, Mosca, Triple S del Bosque, Casa del Pueblo de Carranza y Coordinadora de Resistencia Civil de Los Altos. Cabe señalar que las movilizaciones lideradas por MOCRI-CNPA y la ALCI, si bien reclaman atención a los problemas agrarios, su principal motivación es de carácter político, donde se reivindica la participación en alcaldías, como se ha observado de manera más clara en el caso de esta última. El momento de mayor tensión entre el MOCRI-CNPA y el gobierno del estado, ocurrió el 27 de julio cuando la Policía Judicial del estado realizó un operativo para rescatar a seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes se encontraban retenidos por miembros de esta organización en el Barrio San José, de la región Marqués de Comillas. De acuerdo con el reportaje del periodista del diario *La Jornada*, Hermann Bellinghausen, “en el operativo, verdadera cacería, participaron 16 vehículos policíacos y cinco helicópteros” (*La Jornada*, 3 de agosto de 2001). En dicho operativo fueron

⁹ En Ocosingo han ocurrido incidentes, como la detención de Antonio Sánchez Gómez, indígena de la ARIC-independiente y democrática, por miembros del EZLN. Como represalia la ARIC detuvo a Alonso Gómez Sántiz, miembro del EZLN. La liberación de ambos se produjo después de un acuerdo de no-agresión entre la ARIC-ID y el EZLN (véase *Cuarto Poder*, 19 de julio de 2001: 54).

detenidos seis campesinos de las bases de apoyo del EZLN, quienes se deslindaron de las acciones realizadas por el MOCRI-CNPA¹⁰:

Por su parte, el gobernador del estado, en una entrevista realizada por el diario *La Jornada*, señaló que “tanto el desalojo de Ixtapa como el difícil operativo para rescatar a los rehenes de una casa de seguridad en la comunidad de San José han sido las decisiones más dolorosas de estos meses” (*La Jornada*, 3 de agosto de 2001). El movimiento de esta organización se ha venido radicalizando, sobre todo, porque no encuentra respuesta a su principal demanda por parte del nuevo gobierno: la liberación de sus dirigentes presos (véase *Cuarto Poder*, 7 de septiembre de 2001).

4. LA POLÍTICA DEL NUEVO GOBIERNO

En su informe de los primeros 100 días de gobierno, el gobernador fijó la postura oficial en torno al problema agrario: “Hemos dicho que el gobierno garantizará todas las formas de propiedad de la tierra: la ejidal, la comunal y la privada. Es un compromiso que parte del respeto a la legalidad. En este sentido, instalamos el “Comité de Reacción Inmediata contra las Invasiones”, integrada por la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Rural” (*Cien días de gobierno*, 21 de marzo de 2001).

Después de reconocer que el EZLN mantiene 275 predios invadidos en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano; que 669 grupos y organizaciones distintas al EZLN, habían solicitado la compra de 71 mil hectáreas, que corresponden a 276 predios, de los cuales 22% ya estaban invadidos, y que “diariamente llegan a la Secretaría de Desarrollo Rural nuevas solicitudes de tierra” (*La Jornada*, 15 de abril de 2001), ha sido enfático en su postura.¹¹

Ante la inexistencia de una base sólida que permita el reclamo de más tierra para el sector social, algunas organizaciones también comparten la lectura del gobernador. Este fue el caso de organizaciones simpatizantes del EZLN, como la COAO, la ARIC Independiente y Democrática, la ORCAO y la ARIC-Unión de Uniones, las cuales generaron, en octubre de 2000, una propuesta para la creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sustentable y la Reconciliación, con el propósito de:

atender los problemas de la pobreza, injusticia y división interna, combatiendo de raíz sus causas a partir de generar condiciones para un tipo de desarrollo que contribuya a la sustentabilidad, la integralidad, la distribución justa de la riqueza y beneficios a la producción, la reconstrucción del tejido social, la aplicación de la justicia honesta y la participación de comunidades y organizaciones (COAO-ARIC ID-ORCAO-ARIC UU, 2000).

En esta propuesta no existe mención alguna al problema de la tierra, o a la posibilidad de continuar con el reparto agrario a través de la compra de tierras. A ella se suma una política de contención del conflicto agrario mediante inversiones en proyectos productivos en regiones específicas, como fue el caso de la región Marqués de Comillas, en la Selva Lacandona. Recordemos que desde 1995 el gobierno

¹⁰ “Nosotros, los zapatistas de Marqués de Comillas, por Pico de Oro, en especial en el Ejido Barrio San José, no tenemos que ver con las acciones que estuvieron haciendo los del MOCRI-CNPA, y no porque estemos en contra de luchas por las demandas, pero que se haga por mandato del pueblo: no manipular, como han hecho unos dirigentes de esa organización (*La Jornada*, 3 de agosto de 2001).

¹¹ En entrevista a Marco Lara, reportero de *El Universal*, el gobernador señaló: “La caracterización de los finqueros de los años cincuenta, sesenta ya no es la misma. Más del 80% de la propiedad del estado es social. Desgraciadamente, la lucha por la tierra ha llegado a tal nivel de degradación, que hoy son grupos de campesinos invadiéndole a otro grupo de campesinos; es una lucha de pobres contra pobres. En el centro de todo está el crecimiento de la población, que es mayor que nuestra capacidad de respuesta y que se traduce en una enorme presión. Debemos crear alternativas laborales, por que ya no hay tierra que repartir. Si alguien me sostiene que hay latifundios, estoy dispuesto a verificarlo, a hacer un censo y a repartir tierras” (véase *Cuarto Poder*, 7 de mayo de 2001: 14).

impulsó las empresas sociales como una medida para evitar que el conflicto se extendiera más allá de la región de Las Cañadas (véase cuadros 3 y 4).

Recordemos también que como medida complementaria a los proyectos productivos, a partir de 1999, Marqués de Comillas fue incluida en las acciones del PROGRESA, con una cobertura de 3 019 familias y un monto promedio de 510 pesos para cada una, es decir, una aportación de 1 539 690 pesos mensuales, o una cifra anualizada de 18 476 280, monto que supera en mucho a lo invertido por FONAES en proyectos de ganadería, entre 1995 y 1999, y en la producción de chile jalapeño durante el periodo 1996-1998, lo cual muestra el carácter predominantemente asistencial de la política gubernamental (véase cuadro 5).

La preocupación por recuperar la legitimidad de las instituciones del gobierno federal y estatal en la “zona de conflicto”, explica también la decisión de cancelar uno de los programas más importante que operaron en la administración pasada. En efecto, el 22 de marzo de 2001, en el marco de la Reunión para el Desarrollo de Chiapas, los gobiernos estatal y federal declararon desaparecido el Programa de Desarrollo Regional de Las Cañadas.¹² En esta reunión participaron José Sarukhán, comisionado para el Desarrollo Social y Humano de la Presidencia de la República, cinco secretarios de Estado, el gobernador de Chiapas y los miembros del área social del gobierno. Se anunció el inicio de un programa estatal que partiría de la Selva Lacandona hacia el resto de la entidad; sin embargo no hubo mucha claridad sobre las características del nuevo programa, aunque se indicó que se pondrían en funcionamiento los programas Plan Puebla Panamá, Marcha hacia el Sur, Local de Desarrollo y los Ejes de Política Social del gobierno federal.

En este marco, debe señalarse que la política agraria del gobierno federal, en paralelo a la apertura comercial y productiva del sector agropecuario, se condensa en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) instituido por el gobierno de Salinas, y en estrategias que como el ordenamiento de la propiedad social, la regularización de colonias agrícolas y ganaderas, el desahogo de solicitudes de terrenos nacionales, entre otras acciones, tienen el propósito de instituir un marco favorable y seguro para la inversión y la modernización económica del campo.

5. IMPACTOS Y RESPUESTAS. ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES.

A once años del levantamiento zapatista, el problema del campo chiapaneco, particularmente el tema agrario, registra una complejidad sociopolítica mayor que la existente antes del levantamiento. En el marco de 1994 se abrió una gran posibilidad para que las fuerzas progresistas de Chiapas, las organizaciones campesinas y el EZLN, caminaran juntos en un proceso alternativo de desarrollo del campo chiapaneco. Esta oportunidad, por razones ya vistas, se perdió, y con ello, se perdió la posibilidad de una convergencia más amplia, de nivel nacional, para echar atrás las reformas salinistas al artículo 27 constitucional y el proyecto neoliberal que hoy se sostiene en el campo mexicano.

Muchos de los problemas agrarios que se manifestaron en 2001 no se han resuelto. Persiste el problema de las tierras invadidas en la zona de conflicto y el problema de Montes Azules se mantiene en una situación delicada por la ausencia de un diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.¹³ También se han venido acumulando nuevas demandas de tierras por parte de organizaciones campesinas que ahora se

¹² Previo a esta reunión, Santiago Lorenzo Jiménez, vocero de la COAO, indicó que “el programa Cañadas tuvo fines de contrainsurgencia, desestabilización y control social en las comunidades. El programa sólo benefició a las comunidades ligadas al Partido Revolucionario Institucional, que están en contra del alzamiento del EZLN. Fue un programa asistencial y clientelar con el propósito de controlar a personas y convertirlos en más dependientes del gobierno y fomentar el paternalismo, al comprar líderes que estuvieron a favor del anterior sistema priista que gobernó el país. El nuevo gobierno tiene que construir un nuevo mecanismo que sea un órgano público descentralizado, participativo, y que atienda los problemas de pobreza, injusticia, marginación y la división interna provocada por el anterior sistema de gobierno” (véase *Cuarto Poder*, 8 de marzo de 2001: 13).

¹³ El Secretario de Reforma Agraria reconoció que en la Reserva de Montes Azules existen 190 invasiones, en las que viven desde 8 familias hasta 30 (*El Heraldo de Chiapas*, 6 de septiembre, 2004).

encuentran en una situación incómoda por el hecho de que algunos de sus dirigentes ocupan cargos de primer y segundo nivel en el gabinete del gobierno de Pablo Salazar: nos referimos a la CIOAC que en enero de 2004 informaba de 2 931 nuevos solicitantes que reclamaban la dotación de 17 772 hectáreas (*Cuarto Poder*, 14 de enero de 2004).

En la conmemoración del 86 aniversario de la muerte del Caudillo del Sur, la demanda agraria vuelve a hacerse presente. El día 6 de abril de 2005 organizaciones sociales, campesinas y representantes de sindicatos realizaron una marcha en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para luego plantarse frente a palacio de gobierno, demandando apoyos a la producción, reparto de tierras, tarifas eléctricas justas, libertad de presos políticos y en contra de la política represiva del gobierno del estado.

Ese mismo día se registró un enfrentamiento entre campesinos en el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Oxchuc, con un saldo de tres policías golpeados y un herido, quien resultó ser miembro de la Sociedad Civil en Resistencia. Este acontecimiento es el segundo que ocurre en el municipio de Oxchuc en menos de una semana, el primero fue en el paraje Lelmchig. El día 8 de abril los dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH), anunciaron una jornada de movilizaciones en protesta por el incumplimiento de varias demandas sociales como el reparto agrario, educación popular, derecho a la salud, vivienda para todos, respeto a los derechos humanos, libertad a los presos políticos y libertad de expresión, entre otras.

El 10 de abril se registró una invasión del rancho San Antolín de unas 208 hectáreas, ubicado en el municipio de Chicomuselo. Campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-DI UMOI) intentaron posesionarse de la propiedad que ahora usufructúan 26 ejidatarios de Lázaro Cárdenas que formaron la Sociedad de Producción rural "Nueva Grecia" y que "afirman contar con escrituras notariadas, en donde se les otorga el derecho sobre dichas tierras" (*Cuarto Poder*, 13 de abril de 2005: B11). Cuarenta y ocho horas después la policía realizó el desalojo de los campesinos, pues el estatus jurídico del predio invadido todavía no se ha definido por parte del Tribunal Agrario, aunque al parecer los labriegos ya tienen la sentencia a su favor.

En Venustiano Carranza se presentan tensiones entre la Policía Sectorial y la Agencia Estatal de Investigaciones con los comuneros de la Casa del Pueblo. La presencia de la policía, de acuerdo con la versión del delegado de gobierno Alberto Valdivieso, fue para evitar tomas de tierras en la zona de Pujilic; para los campesinos, los cuerpos policíacos pretendían desalojar a los comuneros del Barrio San Sebastián, también conocido como "El Cafetal", un predio supuestamente propiedad de Teresa Montero y donde ahora está ocupado por unas 1000 viviendas de campesinos.

El conflicto de Carranza constituye uno de los llamados focos rojos que después de varias décadas no termina de solucionarse: en febrero de 2005, Manuel Hidalgo Espinoza (ex dirigente de la organización Casa del Pueblo) fue asesinado y desde entonces, a decir de los comuneros, el gobierno del estado ha implementado patrullajes por la zona con el pretexto de buscar a los autores materiales.

Entretanto, Juan Pérez Pérez, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), "informó que en la mesa de negociación agraria que realizan autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), sólo se resolvieron diez casos de unas 10 mil hectáreas¹⁴ y afirmó que de no resolver los 22 restantes, los grupos campesinos realizarán invasiones" (*Cuarto Poder*, 14 de abril de 2005: B6).

El día 10 de abril, en el marco de la conmemoración del 86 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, fueron invadidos por la COAECH dos predios en el municipio de La Trinitaria: La Huasteca, de 800 hectáreas y San Felipe Carrizal, de 250 hectáreas; y en el municipio de Frontera Comalapa, otro

¹⁴ Estas tierras fueron otorgadas a través del Acuerdo Nacional para el Campo, pero todavía no se ha logrado que el resto de los grupos, 22 de 32, sean beneficiados con las tierras.

predio de 70 hectáreas. Mientras esto ocurría, miles de campesinos entraban a la capital de la entidad: la Organización Campesina Emiliano Zapata-Democrática Independiente-Unión de los Pobres (OCEZ-DI-UNOPI.I) y las organizaciones agrupadas en torno a la COAECH, a las que se unieron las organizaciones agrupadas en la Promotora Estatal de Sindicatos y Organizaciones de Chiapas (PESPOCH). Las demandas de la organizaciones en la marcha fueron en torno a la tierra, libertad a los presos políticos, cancelación de órdenes de aprehensión y el rechazo al Plan Puebla Panamá (PPP).

Los avances de la política agraria del gobierno federal no se dan con la rapidez que quisieran. De acuerdo con la Procuraduría Agraria, el estado de Chiapas sigue registrando “focos rojos”: en los municipios de Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Comunidad Zona Lacandona, San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán. El PROCEDE en Chiapas tiene los indicadores más bajos del país en materia de certificación y de adopción del dominio pleno: hasta el mes de diciembre de 2004, la superficie ejidal certificada era de 1 252 293 hectáreas (un avance de 36%) y, en la propiedad comunal 148 790 hectáreas (un avance de 17.64%) (Registro Agrario Nacional, 2004). Estas cifras evidencian la resistencia de los campesinos al PROCEDE pero también es un reflejo de la conflictividad agraria de Chiapas.

Las organizaciones no tienen una respuesta conjunta que haga frente a las políticas gubernamentales. Registran situaciones de crisis de liderazgo y ha sido notorio que los logros alcanzados por las organizaciones campesinas han sido a todas luces pobres. Están no sólo más atomizadas que antes, sino también con grados agudos de conflictividad interna. Un bloque significativo de éstas, ante la pérdida de una base sólida, han transitado de la demanda por la tierra y por apoyos a la producción, a demandas de naturaleza urbana, y particularmente, a transitar por los posicionamientos políticos en torno las disputas por los gobiernos locales, las presidencias municipales. La ausencia de un proyecto sólido y de continuidad en relación directa con las bases campesinas, ha propiciado su fragilidad y vulnerabilidad frente al gobierno y frente a situaciones coyunturales, en las que operan con márgenes estrechos de continuidad.

La decisión de los líderes de organizaciones campesinas, con un capital de lucha independiente, de apoyar la candidatura de Salazar Mendiguchía esperando una respuesta positiva a sus demandas, ha propiciado conflictos que no sólo confrontan a las mismas organizaciones independientes, sino que también ha terminado por afectar los principios político-ideológicos que les dieron origen. La crisis de liderazgo se impone como una realidad primaria del movimiento campesino actual.

La lucha agraria perdió sus perfiles originales. Es cierto que hoy las confrontaciones agrarias ocurren, como señala el gobernador, entre grupos de campesinos invadiéndose mutuamente. Sin embargo, aunque este hecho es reconocido como un problema que exige una solución definitiva, ninguna de las organizaciones, menos el gobierno, tienen estrategias definidas de solución, en cambio, se sigue bordando sobre estos conflictos de pobres contra pobres, con el afán de alcanzar un capital social que posibilite negociar demandas que, en el caso de las organizaciones, apenas garantizan su precaria supervivencia.

De parte de los gobiernos federal y estatal, es claro que la premisa común es el reconocimiento del fin del reparto agrario en Chiapas, también es claro que a estas alturas, ambos gobiernos reconocen el contexto de fuertes tensiones que vive el campo chiapaneco, propiciada por una crisis de precios de los productos agrícolas, principalmente el café, de falta de créditos y de un programa de reactivación económica y abatimiento de los niveles de pobreza. Sin embargo, hasta el año 2005 no existe por la parte gubernamental un replanteamiento del esquema del desarrollo del campo chiapaneco y de la economía del estado. El gobierno sabe que hoy los campesinos sólo tienen dos vías para la supervivencia: mantenerse en el campo exigiendo políticas públicas que les permita sobrevivir, o la emigración hacia el norte del país y a Estado Unidos.

Queda cada vez más claro que la decisión gubernamental está tomada: mantener la misma política social como política compensatoria a la política económica que impacta negativamente a amplios sectores

de la sociedad, especialmente a los grupos más vulnerables que abarcan las tres cuartas partes de la población de la entidad. Empezando por la región de Las Cañadas, el gobierno federal dio nombre a su política social para Chiapas desde mediados de mayo del 2001: se trata de la estrategia Contigo, donde además de los tres niveles de gobierno, se pretende que participen la iniciativa privada, universidades, organizaciones de la sociedad civil y de asistencia privada. Una estrategia tipo teletón para sacar de la pobreza los indígenas.¹⁵

También es cada vez más claro que una parte importante de la población joven del campo chiapaneco ya tomó una decisión de cara a las políticas gubernamentales: lanzarse a una aventura, quizá sin retorno. Se trata de los miles de campesinos, o hijos de ellos, que emigran del campo a las ciudades de Tijuana, Hermosillo y Chihuahua, con destino final a Estados Unidos.¹⁶

De cara a las políticas gubernamentales, también está el proyecto autonómico del zapatismo que cambia los términos de la problemática agraria. No es un hecho menor que en una porción importante del territorio chiapaneco, como concepción y ordenamiento de la esfera comunitaria, se viva una experiencia de construcción de autonomía, que en su etapa actual, definida como "Autonomía y resistencia", se manifieste en prácticas sociopolíticas en núcleos de población donde se encuentran las bases de apoyo. Esta fase se inició con el anuncio oficial de la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, el 19 de agosto de 2003.

Aunque Villafuerte y Montero (2005) han registrado una flexibilización entre las partes, permitiendo el EZLN la presencia gubernamental, y permitiendo el gobierno los procesos de reorganización de las relaciones entre dirigencias y bases a través de las Juntas de Buen Gobierno, ello no significa ausencia de conflictos, estos existen cotidianamente entre bases de apoyo del EZLN y campesinos afiliados a otras organizaciones. En igual sentido, el relativo equilibrio en las relaciones entre el gobierno federal y el EZLN, que puede explicarse por el comportamiento de no agresión hacia el EZLN que ha asumido el gobierno del estado, no tiene ninguna garantía de continuidad, por el contrario, están en juego dos proyectos sobre el futuro de la zona de conflicto y de regiones, municipios y localidades con población indígena. Dos proyectos que, a falta de mayor información, pueden ser ilustradas en el tratamiento que las partes le han venido dando al tema de Montes Azules. El tema de Montes Azules es crucial para el zapatismo porque está en juego su estrategia de resistencia, donde las bases zapatistas no están enfrentadas con otras comunidades sino con el gobierno federal y la Comunidad Lacandona. Es crucial para el gobierno federal y estatal pues está en juego no sólo el modelo de gobierno vigente sustentado en la Constitución mexicana, sino el empeño manifiesto en proyectos como lo es el Corredor Biológico Mesoamericano, el proyecto Población, Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Programa de Coinversión para el Desarrollo Socioeconómico de Chiapas, y el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenido en la Selva Lacandona.

Construir una agenda, a once años del levantamiento zapatista, exige replantear el diagnóstico sobre el campo chiapaneco y su sociedad. Se hace necesario reconocer que los problemas de Chiapas y sus distintos ámbitos no se explican en sí mismos, su interdependencia con el contexto global es muy grande, paradójicamente lo es en dos sentidos: en lo material, los flujos de mercancías y capitales, y ahora los flujos de remesas; en lo subjetivo, en el retorno de las identidades territoriales como lo es el proyecto de autonomía étnica proclamada por el EZLN, que se acompaña de una diversidad de organizaciones no gubernamentales (ONG), con ámbitos de operación fuera y dentro del ámbito rural, pero con una lógica distinta al de las viejas organizaciones campesinas.

¹⁵ La estrategia Contigo tiene cuatro líneas: "manos a la obra", centrado en la atención a las microrregiones de alta marginación; "construimos la paz", con énfasis en la zona de Las Cañadas; "ganamos todos", con la que se llevará a cabo el mecanismo de reembolso del IVA y, finalmente, "cuentas claras", con la que se pretende realizar la rendición de cuentas (*Cuarto Poder*, 10 de mayo de 2001: 14).

¹⁶ De acuerdo con las estadísticas del Banco de México, en el año 2004 las remesas enviadas por chiapanecos que trabajan en Estados Unidos fue de poco más de 500 millones de dólares, una cantidad superiores a los ingresos obtenidos por el turismo que visitó la entidad.

En resumen, el parteaguas abierto por el EZLN es útil para reconocer que la magnitud de los desafíos que enfrentan las organizaciones campesinas implica no sólo dejar de caminar *solo o atrás de ...* para caminar *juntos*, sino también recuperar la memoria histórica y entender lo nuevo, como continuidad renovada, de un movimiento campesino que dejó huella y que aspira, debe aspirar, en un marco plural, a ser presente. La vía electoral ha terminado por imponerse como el mecanismo para elegir y quitar gobiernos, el asalto a la vía electoral por parte de las organizaciones campesinas es un hecho nuevo, pero ésta exige la destitución de la lógica clientelar y facciosa que le amenaza. En el campo de la investigación, implica reconocer que muchos de los supuestos de nuestras interpretaciones se quedaron a la zaga de las transformaciones, un tanto violentas, ocurridas en la sociedad rural de la última década.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1

Población ocupada por grupos de ingresos, total y en el sector primario (año 2000)

Población y rango de ingreso	Total	%	Primario	%
Población ocupada	1,206,621	100.000	570,169	100.00
No recibe ingresos	271,026	22.46	231,812	40.65
Hasta 50% de un salario mínimo	125,878	10.43	73,255	12.84
Más de 50% y menos de un S.M.	273,646	22.67	178,812	31.36
De 1 a 2 salarios mínimos	245,187	20.32	54,850	9.61
Más de 2 y menos de 3 S.M.	79,434	6.58	7,412	1.30
De 3 a 5 salarios mínimos	85,523	7.08	4,426	0.77
Más de 5 y hasta 10 salarios mínimos	50,262	4.16	2,272	0.40
Más de 10 salarios mínimos	16,653	1.38	2,075	0.36
No especificado	59,012	4.89	15,255	2.67

Fuente: INEGI, 2001

Cuadro 2

Avance de los acuerdos agrarios. Superficie y número de beneficiados según organización seleccionada (cifras al 31 de agosto de 2000)

Organizaciones campesinas	Superficie (hectáreas)		Beneficiados en constancia	%
	Acordada	Entregada		
CNC	26,355.51	23,872.83	11,329	82.0
CIOAC	15,887.99	10,259.55	3,737	85.0
SOCAMA	15,480.33	15,446.78	3,510	78.0
OCEZ-CNPA	13,641.51	10,998.29	2,980	85.0
ORCAO	6,403.00	3,149.13	1,896	81.0
OPEZ-BFP	7,763.04	4,596.56	1,550	94.0
OPEZ	7,233.51	3,908.45	1,648	88.0
CEC	8,927.00	6,580.42	2,805	78.0
ARIC	7,157.55	5,622.90	1,797	73.0
ALINCA	6,207.34	5,880.22	2,431	93.0
XI-NICH	5,834.95	5,133.03	1,439	67.0
Subtotal	120,891.73	95,448.16	35,122	82.18
% total	48.27	48.74	49.26	
Total	250,397.24	195,807.91	71,289	87.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario (SDA), 2000

Cuadro 3
Región Marqués de Comillas. Inversión de FONAES en proyectos de ganadería bovina

Año	Organización campesina	Inversión en pesos	Núm. de socios
1995	Aso. Agrícola Local Salomón González Blanco	1,015,145.5	36
1995	Grupos de trabajo independiente	765,663.3	49
1995	MOCRI-CNPA	1,948,619.5	113
1995	Unión de Ejidos Julio Sabinés	2,725,385	127
1996	Grupo de trabajo independiente	557,585	16
1998	MOCRI-CNPA	3,252,702.7	106
1999	Coordinación Nacional Campesina	204,960	14
1999	Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Selva Marqués de Comillas	1,731,809.8	49
1999	Grupo de trabajo independiente	209,039.5	15
	Total	12,760,239	526

Fuente: oficina Regional de FONAES-Selva, Palenque, Chiapas, 2000. Tomado de De Luna, 2000.

Cuadro 4
Región Marqués de Comillas. Inversión de FONAES en proyectos de chile Jalapeño

Año	Localidad	Organización	Socios	Recursos entregados (pesos)
1996	Quetzalcóatl	MOCRI-CNPA	70	152,250.00
1996	Quiringüicharo	MOCRI-CNPA	50	231,657.80
1997	Flor de cacao	MOCRI-CNPA	134	572,180.00
1997	Quetzalcóatl 2ª sección	MOCRI-CNPA	17	72,590.00
1997	Roberto Barrios	MOCRI-CNPA	25	106,570.00
1997	El Porvenir	MOCRI-CNPA	47	200,690.00
1997	Nuevo Paraíso	MOCRI-CNPA	17	72,590.00
1997	Río Salinas	MOCRI-CNPA	24	102,480.00
1997	San José	MOCRI-CNPA	29	123,830.00
1997	Tierra y Libertad	MOCRI-CNPA	21	89,670.00
1998	Zamora Pico de Oro	U. de E. Julio Sabinés	39	152,596.24
1998	Belisario Domínguez	U. de E. Julio Sabinés	26	57,039.94
1998	San Isidro	U. de E. Julio Sabinés	21	75,721.11
1998	Boca Chapul	U. de E. Julio Sabinés	26	101,730.82
1998	Adolfo López Mateos	U. de E. Julio Sabinés	18	39,489.19
1998	Galicia	U. de E. Julio Sabinés	26	112,906.14
	Total		590	2,264,171.24

Fuente: Oficina Regional de PROGRESA-Selva, Palenque, Chiapas, 2000. Tomado de De Luna, 2000

Cuadro 5
Región Marqués de Comillas. Distribución de familias beneficiadas con el PROGRESA

Módulo	Número de ejidos	Número de familias
Benemérito de las Américas	2	928
Nuevo Chihuahua	6	583
Nuevo Orizaba	7	494
Zamora Pico de Oro	8	728
Boca Chapul	9	286
Total	32	3,019

Fuente: Oficina Regional de PROGRESA-Selva, Palenque, Chiapas, 2000. Tomado de De Luna 2000

Cuadro 6
Centros de Atención Social (CAS) en 1998

Municipio	Localidades	Habitantes
Ocosingo	348	90,782
Las Margaritas	178	36,786
La Independencia	85	22,703
Altamirano	73	12,542
Total	684	162,813

Fuente: Coordinación del Programa Cañadas. Avance de la estrategia del desarrollo integral de Las Cañadas 1995-1998, citado por Velasco, 2002

Cuadro 7
Inversión del Programa Cañadas 1995-1998 (pesos corrientes)

Inversión total	253,923,086.00	100.00
Camino rurales	106,359,568.00	41.88
Electrificación convencional y no convencional	45,522,288.00	17.92
Proyectos productivos y abasto	32,794,635.00	12.91
Agua potable	23,506,243.00	9.25
Vivienda digna	19,979,451.00	7.86
Subtotal	228,162,185.00	89.85

Fuente: Programa de Fondos Regionales Compensatorios. Libro Blanco, Mimeo. Tomado de Velasco, 2002

SIGLAS

- AEDPCH. Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco
 ALINCA. Alianza Campesina Independiente
 ARIC-UU. Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones
 ARIC-ID. Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática
 ALCI. Alianza de Liberación Campesina de Ixtapa
 CEC. Coordinadora Estatal Campesina
 CEOIC. Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas
 CIOAC. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
 CIOAC-O. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Oficial
 CNC. Confederación Nacional Campesina
 CNPA. Coordinadora Nacional Plan de Ayala
 COAO. Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
 COAECH. Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas
 OCEZ-DI-UNOPI.I. Organización Campesina Emiliano Zapata-Democrática Independiente-
 Unión de los Pobres
 CPOSECH. Congreso Permanente de Organizaciones Sociales y Económicas de Chiapas
 CUT. Central Campesina Unitaria de Trabajadores
 EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional
 MOCRI. Movimiento de Organizaciones Campesinas y Regionales
 MOCRI-CNPA. Movimiento de Organizaciones Campesinas y Regionales- Coordinadora
 Nacional Plan de Ayala
 PESOCH. Promotora Estatal de Sindicatos y Organizaciones de Chiapas
 PROCEDE. Programa de Certificación de Derechos Ejidales
 PRPF. Programa para la Regularización de la Propiedad Fideicomita
 PGJE. Procuraduría General de Justicia del Estado
 PPP. Plan Puebla Panamá
 OCEZ. Organización Campesina Emiliano Zapata
 OPEZ. Organización Proletaria Emiliano Zapata
 OPEZ-BPP. Organización Proletaria Emiliano Zapata-Bloque del Poder Popular
 SDA. Secretaría de Desarrollo Agrario
 SRA. Secretaría de la Reforma Agraria
 SOCAMA. Sociedad Campesino-Magisterial
 XI-NICH. Hormiga Alborotada

BIBLIOGRAFÍA

- Bartra, Armando.** 1994. "Chiapas en el centro", *La Jornada del Campo*, 6 de septiembre, México, pp. 2-3.
- De Luna, Magdalena de la Luz.** 2000. *La empresa social en la subregión de Marqués de Comillas, selva Lacandona, Chiapas: ¿una alternativa de desarrollo?*, tesis de grado, Maestría en Desarrollo Rural Regional, Universidad Autónoma Chapingo, México.
- COAO, ARIC-ID, ARIC-UU, 2000, Comisión Estatal para el Desarrollo Sustentable y la Reconciliación, Mimeo.
- Dieterlen, Paulette.** 2001. "La pobreza aleja el ideal democrático", en *La Jornada*, 9 de junio, México.
- Entrevista al dirigente de la organización Solidaridad Campesina Magisterial, 7 de junio, 2000.
- García Aguilar, María del Carmen.** 1998. "Sociedad civil y democracia en Chiapas", *El Cotidiano*, número 87, enero-febrero, UAM-Azcapotzalco, México.
- Gobierno del Estado de Chiapas. Cuarto Informe de Gobierno, 2004, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Gobierno del Estado de Chiapas. 2001. *Cien días de gobierno*, 21 de marzo de 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Gobierno del Estado. 2001. Comunicado de prensa 728, 28 de abril.
- INEGI. 2001. *XII Censo General de Población y Vivienda 2000*, Aguascalientes, México.
- Informe Jiménez Pablo.** *La frontera entre la lucha social y la delincuencia*, s/f, sin lugar de publicación.
- Moguel, Julio.** 1994. "El CEOIC: el otro poder en la guerra de Chiapas", *La Jornada del Campo*, 22 de febrero, México.
- Lisbona, Miguel.** 2000. "Génesis de un conflicto agrario y límites en el noroeste de Chiapas: La Selva Chimalapa" en *Anuario 1999*, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica-UNICACH, Tuxtla Gutiérrez, México.
- Procuraduría Agraria. Marzo, 2000, mimeo.
- Renard, Cristina.** 1998. *Los Llanos en Llamas: San Bartolomé, Chiapas*, Universidad Autónoma Chapingo-Claves Latinoamericanas, México.
- Secretaría de Desarrollo Agrario (SDA). 2000. Avance de los Acuerdos Agrarios, agosto.
- Vanguardia del Sureste*, 13 de septiembre de 2001.
- Velasco, Ernesto.** 2002. "La gestión social en la zona de conflicto. El programa Cañadas (1995-1998)" en *La política social en Chiapas*, Reyes, María Eugenia y Araceli Burguete (coord), UNICACH, México.

Villafuerte, Daniel y José Montero. 2005. *Chiapas en la coyuntura actual desde la visión de los actores*, WSP-Internacional Oficina para América Latina, Ciudad de Guatemala.

Villafuerte, Daniel, Jesús Morales, Gabriel Ascencio, María del Carmen García, Carolina Rivera, Miguel Lisbona, Salvador Meza. 2002. *La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos*, FCE., México.

FUENTE HEMEROGRÁFICA

- Cuarto Poder*, 8 de marzo, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 10 de marzo, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 11 de marzo, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 6 de mayo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 7 de mayo, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 10 de mayo, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 19 de junio, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 19 de julio, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 7 de septiembre, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 10 de septiembre, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 13 de septiembre, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 15 de septiembre, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 18 de septiembre, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 27 de septiembre, 2001, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 14 de enero de 2004, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 13 de abril, 2005, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Cuarto Poder, 14 de abril, 2005, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Heraldo de Chiapas, 6 de septiembre, 2004, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Perfil de La Jornada, 3 de marzo, 1994, México.
La Jornada, 16 de septiembre, 1994, México.
La Jornada, 19 de enero, 2001, México.
La Jornada, 23 de marzo, 2001, México.
La Jornada, 15 de abril, 2001, México.
La Jornada, 3 de agosto, 2001, México.
La Jornada, 6 de febrero, 2001, México.
La Jornada, 1 de octubre, 2001, México.
Tiempo, noviembre, 1997, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Este Sur, noviembre, 1997, Chiapas.

